



Consejo Económico y Social

Distr. general
6 de abril de 2016
Español
Original: inglés
Español, francés e inglés
únicamente

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

58º período de sesiones

6 a 24 de junio de 2016

Tema 6 a) del programa provisional

Examen de los informes:

**informes presentados por los Estados partes
en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto**

Lista de cuestiones relativa al sexto informe periódico de Suecia

Adición

Respuestas de Suecia a la lista de cuestiones*

[Fecha de recepción: 15 de marzo de 2016]

* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.

GE.16-05572 (S) 040516 060516



* 1 6 0 5 5 7 2 *

Se ruega reciclar



I. Información general

Cuestión 1

1. Suecia aplica el principio de que los tratados internacionales no forman parte automáticamente de su legislación.
2. Para ser aplicables, dichos tratados deben convertirse en leyes suecas o incorporarse mediante una ley especial. El procedimiento tradicional para aplicar un tratado internacional consiste en establecer disposiciones equivalentes en una ley sueca independiente, cuando esas disposiciones no existan todavía.

Cuestión 2

3. El sistema sueco está organizado de tal manera que los tribunales o los organismos no aplican directamente el contenido sustantivo del Pacto. Sin embargo, conforme a la jurisprudencia sueca, constituida por una serie de decisiones del Tribunal Supremo, la legislación nacional y las enmiendas a esta deben interpretarse de conformidad con las obligaciones internacionales de Suecia.

Cuestión 3

4. La Caja Nacional de Pensiones de Suecia, los Fondos AP, se rige por la Ley de los Fondos de Pensiones Nacionales (Fondos AP) (SFS 2000:192).
5. De conformidad con la Ley de Fondos AP, los Fondos AP son independientes del Gobierno. La junta de cada Fondo AP es responsable de la organización de las operaciones del fondo y de la gestión de sus activos. Con arreglo a la Ley de Fondos AP, el Gobierno nombra a los miembros de la junta de los Fondos AP y realiza una evaluación anual de su gestión de los activos.
6. La Ley de Fondos AP no describe en detalle la forma en que se llevará a cabo la gestión de los activos, dado que ello es responsabilidad de la junta. El objetivo general de la gestión de los activos es lograr la rentabilidad más alta posible en relación con el nivel de riesgo para el sistema de pensiones. Sin embargo, en la parte expositiva de la Ley de Fondos AP se señala que los aspectos éticos y ambientales deben tenerse en cuenta en la gestión de los fondos sin comprometer el objetivo general de conseguir una gran rentabilidad.

II. Cuestiones relativas a las disposiciones generales del Pacto (arts. 1 a 5)

Artículo 1, párrafo 2

Libre disposición de las riquezas y los recursos naturales

Cuestión 4

7. El objetivo general de la política sobre los samis es promover una cultura sami pujante basada en la cría de renos y otras actividades económicas ecológicamente sostenibles de los samis.
8. El Gobierno quiere aumentar el nivel de ambición de la política sobre los samis. Es necesario intensificar las oportunidades del pueblo sami de conservar y desarrollar su propia vida cultural y social. Esto también se aplica al derecho del pueblo sami a la libre

determinación. Los esfuerzos para lograr una convención nórdica sami son fundamentales para reforzar los derechos de los samis a mantener y desarrollar su idioma, su cultura, sus actividades económicas y su vida social. Las negociaciones para una convención nórdica sami están en curso.

9. El diálogo con el Parlamento sami sobre futuras políticas sami es otro proceso importante en marcha. La idea es llevar a cabo un diálogo dentro de este proceso y con el Parlamento sami sobre cómo avanzar en las cuestiones de política sami importantes.

Cuestión 5

10. El proyecto de ley de presupuesto de 2015 disponía que el Parlamento sami debía fortalecerse con 3 millones de coronas suecas. La consignación administrativa del Parlamento sami se elevará en 2 millones de coronas y el subsidio estatal para la cultura sami aumentará en 1 millón de coronas por año.

11. Un aspecto importante del proceso legislativo de Suecia es la práctica de distribuir informes gubernamentales y otros documentos a los órganos pertinentes para que hagan observaciones. Los organismos gubernamentales, como el Parlamento sami, a los que se remiten asuntos para su examen cuando son una parte interesada, tienen la obligación de emitir una opinión. Estas opiniones son examinadas y estudiadas por la Secretaría General del Gobierno. Cabe mencionar como ejemplo que, como resultado de esta práctica, con arreglo a la legislación actual, a saber, la Ley de Cría de Renos, la Ley de Planificación y Construcción, la Ley de Minerales y el Código del Medio Ambiente, debe consultarse la opinión de la aldea sami (sameby) afectada antes de adoptarse cualquier decisión. En el nivel regional hay delegaciones sobre la cría de renos que se encargan de plantear cuestiones relativas al arrendamiento de tierras y otros asuntos de importancia fundamental sobre el uso de la tierra por los samis. Esas delegaciones incluyen a representantes de los samis.

Cuestión 6

12. Tanto el derecho de propiedad como el derecho a dedicarse a la cría de renos están consagrados en la Constitución y, por consiguiente, tienen el mismo grado de protección. La vulneración de los derechos debe compensarse de conformidad con el reglamento de expropiación.

13. El derecho de los samis a utilizar la tierra y el agua para el mantenimiento personal y de sus renos está protegido jurídicamente, por la Ley de Cría de Renos de 1971. Tiene sus orígenes en un reglamento de 1886. Después de las controversias entre propietarios y pastores de renos, a fin de aclarar aún más los derechos consuetudinarios de pastoreo de renos en relación con el derecho de propiedad, el Gobierno de Suecia ha nombrado varios comités y comisiones. Uno de ellos es el Comité de Trazado de Límites. Las conclusiones del Comité constituyen una buena y sólida base para el futuro si surgieran controversias sobre el uso desde tiempos inmemoriales de una zona determinada. Desde que el Comité presentó sus conclusiones, no se han emprendido actuaciones judiciales para impugnarlas. Puesto que el Comité ha realizado importantes esfuerzos para demarcar la zona de pastoreo de invierno, no es probable que un tribunal impugne las conclusiones.

14. La cuestión de la carga de la prueba ha sido tratada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso relativo a la cuestión del pastoreo de invierno en el condado de Härjedalen. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó en su decisión que, dado que los terratenientes debían mostrar su título de la propiedad objeto de la controversia, debía considerarse lícito y razonable que la carga de la prueba en relación con el pastoreo de invierno en dichas propiedades recayera en las aldeas samis (sameby), por ser las que reclamaban ese derecho.

15. No hay intención de hacer cambios sobre la carga de la prueba. Es un fundamento básico del sistema jurídico sueco el que, si alguien hace una reclamación, la misma persona tenga la carga de la prueba en relación con esta reclamación.

Cuestión 7

16. Como se mencionó anteriormente, el derecho de los samis a utilizar la tierra y el agua para el mantenimiento personal y de sus renos está protegido jurídicamente mediante la Ley de Cría de Renos de 1971. La Ley también contiene un párrafo en el que se estipula que el uso de la tierra que ponga en peligro la existencia de la cría de renos no está permitido. La vulneración de los derechos debe compensarse de conformidad con el reglamento de expropiación. Este derecho está protegido en la Constitución.

17. Hay tres procesos principales de concesión de permisos previos a que se pueda iniciar una operación minera. Durante las tres fases se llevan a cabo las mismas consultas con las aldeas samis (sameby) que con los propietarios de tierras y los propietarios de otros derechos especiales.

18. Durante las consultas, las aldeas samis (sameby) pueden plantear objeciones a las operaciones previstas y pedir que los permisos estén sujetos a condiciones especiales para limitar los efectos en la cría de renos en la zona.

19. El 1 de agosto de 2014 se modificó la Ley de Minerales de modo que, si se solicita, el plan de operaciones (que es necesario antes de que pueda comenzar la exploración) debe proporcionarse en idioma sami. Además, se debe enviar al Parlamento sami un plan de operaciones válido.

20. El Código del Medio Ambiente contiene disposiciones para la protección de las zonas de interés nacional para el pastoreo de renos y la extracción de minerales, entre otras cosas. Cuando se producen reclamaciones opuestas sobre una determinada zona existen en el Código normas sobre la manera de dar preferencia a un uso sobre el otro.

21. También cabe mencionar que el derecho al uso de la tierra de los samis se aplica en las tierras de propiedad del Estado y las de propiedad privada. Esto significa que la venta de tierras del Estado a particulares no afectará el derecho al pastoreo de renos en dichas tierras. También cabe mencionar que, en esos casos, las aldeas samis (sameby), a través de sus representantes en las delegaciones sobre la cría de renos, asesoran a las juntas administrativas en la toma de decisiones. Se pueden presentar recursos al Gobierno.

Artículo 2

No discriminación

Cuestión 8

22. La Secretaría General del Gobierno está actualmente elaborando el plan de acción contra el racismo.

Cuestión 9

23. Es necesaria una legislación efectiva y amplia contra la discriminación para combatir las acciones que directa o indirectamente vulneran el principio de igualdad de todas las personas. La Ley de Lucha contra la Discriminación de 2009 incluye protección frente a siete motivos de discriminación; la etnia (que incluye la discriminación racial), el sexo, la orientación sexual, la religión u otras creencias, la discapacidad, la edad y la identidad o expresión transexual.

24. Se nombró a un investigador especial en enero de 2014 para que propusiera maneras de organizar y hacer efectiva la labor contra la discriminación. El investigador presentará sugerencias para garantizar condiciones adecuadas para que las víctimas de discriminación hagan valer sus derechos. El investigador deberá también determinar si la ayuda estatal para actividades destinadas a impedir y combatir la discriminación es el método más eficaz de prevención y lucha contra la discriminación en el nivel regional y local. El investigador deberá decidir si las juntas administrativas de condado deben tener una mayor responsabilidad en la labor contra la discriminación. Está previsto que la investigación concluya el 16 de diciembre de 2016.

25. En comparación con 2011 y los años anteriores, existe una débil tendencia a la baja de la tasa de delitos esclarecidos cuyo autor ha sido identificado. Esta tendencia se observa también en el conjunto de delitos denunciados, independientemente de que tengan un componente de motivación por prejuicios o no. Los cambios en la naturaleza de los delitos denunciados pueden ser una explicación posible para la disminución de los casos de delitos motivados por prejuicios específicamente. Algunos tipos de delitos, como las pintadas, generalmente se consideran más difíciles de investigar e imputar a un sospechoso que otros, como la agresión. En las estadísticas de delitos motivados por prejuicios, la proporción de delitos de agresión denunciados ha disminuido del 21% al 15% entre 2008 y 2014. Durante el mismo período, la agitación contra un grupo nacional o étnico ha aumentado. Estos delitos a menudo involucran la realización de pintadas o comentarios en foros de Internet. Hay razones para creer que el cambio en la naturaleza de los delitos denunciados puede haber influido en las posibilidades de investigar los delitos y esclarecerlos. Cabe señalar también que, con excepción de las agresiones y las amenazas ilícitas, los tipos de delitos que constituyen la mayoría de las estadísticas de delitos motivados por prejuicios generalmente tienen una tasa de delitos esclarecidos cuyo autor ha sido identificado de entre 0% y 6%, independientemente de si están o no vinculados a un delito con elementos de motivación por prejuicios. Dentro del sistema judicial se adoptan medidas continuamente para aumentar la capacidad de abordar los delitos motivados por prejuicios.

Cuestión 10

26. Las iniciativas en el nivel local son esenciales para garantizar los derechos de los romaníes y, por lo tanto, fundamentales para la aplicación de la Estrategia Sueca para la Integración de los Romaníes durante el período de 2012 a 2032. Dentro del marco de un proyecto piloto en cinco municipios que reciben subvenciones del Gobierno se está aplicando un enfoque a largo plazo con el objetivo de incorporar experiencias y métodos en la organización ordinaria.

27. El Gobierno de Suecia también ha prestado un amplio apoyo a la capacitación y la labor de los mediadores en las escuelas y los servicios sociales entre 2012 y 2016. Se ha encargado a la Agencia Nacional de Educación y el Consejo Nacional de Salud y Bienestar que organicen programas educativos para los mediadores. Varios municipios han solicitado subvenciones estatales para cubrir parte de los sueldos de los mediadores. Los mediadores han contribuido a que un número cada vez mayor de niños romaníes asista a centros preescolares y de enseñanza obligatoria y varios municipios consideran que los mediadores han ayudado a resolver situaciones en el nivel individual de mejor manera y a que más romaníes aumenten su confianza en las autoridades.

28. La participación y la influencia de los romaníes son cruciales para el éxito de los esfuerzos de inclusión de los romaníes. La Secretaría General del Gobierno y las autoridades y los municipios pertinentes han aplicado y desarrollado consultas de varios tipos con expertos y representantes romaníes.

29. El Defensor de la Igualdad presentó un informe sobre la discriminación contra los romaníes en abril de 2011, sobre la base de un análisis de alrededor de 230 casos en los que

romaníes habían denunciado discriminación. El informe fue elaborado de manera conjunta con un grupo de consulta romaní. En el informe se señala que los romaníes son objeto de discriminación en situaciones cotidianas, a pesar de que está prohibido por la ley. El informe muestra cómo se manifiesta la discriminación, pero también de qué manera pueden los romaníes exigir una reparación cuando sus derechos hayan sido vulnerados. En 2013, 2014 y 2015 el Defensor de la Igualdad intensificó su labor con los romaníes y en su favor mediante la realización de un proyecto centrado en la discriminación contra los romaníes en los servicios sociales y el mercado de la vivienda.

30. El Defensor de la Igualdad y la Comisión de Lucha contra los Prejuicios en relación con los Gitanos, que ha luchado durante dos años contra el antigitanismo en la comunidad a través de varias iniciativas, son particularmente importantes en la lucha contra la discriminación de los romaníes. La labor del Foro de Historia Viva, en particular la exposición “Somos romaníes: conozca a las personas detrás del mito”, que finalizó en 2015, también ha sido una parte importante de los esfuerzos de lucha contra la discriminación mediante la sensibilización de la sociedad acerca de los romaníes.

31. El Gobierno actualmente está preparando una segunda fase de la Estrategia con nuevos fondos (58 millones de coronas suecas para el período de 2016 a 2019).

Artículo 3

Igualdad de derechos entre hombres y mujeres

Cuestión 11

32. La fijación de salarios no está regulada por la ley; sino que es gestionada por los agentes sociales. El Estado no interfiere. Un organismo público específico, la Oficina Nacional de Mediación, está encargado de mediar en los conflictos laborales y promover un sistema eficaz de fijación de salarios, así como recopilar las estadísticas oficiales sobre salarios en Suecia. Con arreglo a sus instrucciones, la Oficina Nacional de Mediación debe analizar la evolución salarial desde la perspectiva de la igualdad entre los géneros.

33. Una comparación del salario medio de las mujeres y los hombres en 2014 muestra que el salario medio de las mujeres era equivalente al 86,8% del de los hombres. La explicación más importante para esta diferencia salarial es que las mujeres y los hombres trabajan en ocupaciones distintas y que esas ocupaciones llevan aparejados niveles distintos de remuneración. La Oficina Nacional de Mediación publica informes y organiza conferencias periódicamente en que se examinan estas cuestiones.

34. El Gobierno también considera que reintroducir la obligación de realizar encuestas salariales anuales es una necesidad urgente a fin de eliminar las diferencias injustificadas entre los sueldos de los hombres y las mujeres. Por lo tanto, debe modificarse la Ley de Lucha contra la Discriminación. La Secretaría General del Gobierno está examinando actualmente la cuestión y el Gobierno tiene la intención de presentar un proyecto de ley al Parlamento esta primavera con propuestas sobre estas cuestiones.

35. De conformidad con las disposiciones vigentes de la Ley de Lucha contra la Discriminación, las medidas activas incluyen el que los empleadores deban tratar de igualar los salarios entre hombres y mujeres y prevenir las diferencias en cuanto a la remuneración y otras condiciones de trabajo. Todos los empleadores deben llevar a cabo un análisis de los salarios cada tres años. Además, todos los empleadores con 25 trabajadores o más tienen la obligación de elaborar un plan de acción de igualdad salarial cada tres años.

La mujer en los procesos de toma de decisiones

36. El Gobierno tiene la intención de acelerar los progresos hacia una distribución por género más equitativa en las juntas directivas de las sociedades que cotizan en bolsa. En el proyecto de ley de presupuesto para 2016 el Gobierno anunció la meta de que el porcentaje de mujeres en las juntas directivas de las empresas que cotizan en bolsa sea por lo menos del 40% a más tardar en 2016. Si no se cumple este objetivo, el Gobierno propondrá legislación para que se fijen cuotas. El Estado también ha logrado una distribución por género más equitativa en las empresas de propiedad exclusiva del Estado.

37. El Riksdag ha dispuesto que debería haber objetivos de distribución por género respecto de los profesores de nueva contratación en las instituciones de enseñanza superior. En consecuencia, el Gobierno ha especificado dichos objetivos, que se aplican a todas las universidades y otras instituciones de enseñanza superior con órganos rectores públicos, hasta 2015 inclusive. Actualmente, el Gobierno está elaborando propuestas sobre los nuevos objetivos para la distribución por género de los profesores de nueva contratación en las instituciones de enseñanza superior.

Trabajo a tiempo parcial

38. El porcentaje de personas empleadas que trabajan a tiempo parcial en Suecia es de 23%, pero la distribución es desigual entre los sexos. La tercera parte de las mujeres empleadas trabajaba a tiempo parcial en 2014, en comparación con el 14% de los hombres. Las mujeres trabajan a tiempo parcial principalmente en sectores como la hostelería, el comercio y la atención de la salud.

39. El derecho al trabajo a tiempo completo es fundamental para todo el mercado laboral. El Gobierno considera que el trabajo a tiempo completo debería ser la norma y el trabajo a tiempo parcial una posibilidad. El Gobierno confía en que los interlocutores sociales del sector de la asistencia social resolverán la cuestión del trabajo a tiempo completo como la norma.

40. Para promover la igualdad de género en el trabajo doméstico y de cuidado de la familia no remunerado y en el mercado de trabajo, el Gobierno ha presentado al Riksdag la propuesta de introducir un tercer mes de prestación parental reservado para cada progenitor a partir del 1 de enero de 2016. El Riksdag decidió sobre la propuesta en otoño de 2015. El nuevo reglamento implica que no se puede transferir a otra persona un total de 90 días por la cuantía de la prestación por enfermedad por cada progenitor.

41. El Gobierno ha presentado también una propuesta para suprimir la prestación municipal para criar a los hijos a partir de febrero de 2016; el Riksdag adoptó una decisión en otoño de 2015. Además, en el proyecto de ley de presupuesto para 2016, el Gobierno anunció el nombramiento de una comisión de investigación encargada de realizar una revisión general del seguro parental. La comisión de investigación presentará su informe final en octubre de 2017. Se presentará un informe preliminar en octubre de 2016.

III. Cuestiones relativas a disposiciones específicas del Pacto (arts. 6 a 15)

Artículo 6

Derecho a trabajar

Cuestión 12

42. Una de las prioridades del Gobierno es reducir el desempleo entre las personas con discapacidad. En 2014, el 84% de la población de 16 a 64 años era parte de la fuerza de trabajo, lo que equivale a cerca de 5,1 millones de personas. Entre las personas con discapacidad, el 69% era parte de la fuerza de trabajo, lo que equivale a 665.000 personas. Entre las personas con una capacidad de trabajo reducida, el 63% era parte de la fuerza de trabajo.

43. En el proyecto de ley de presupuesto para 2016, el Gobierno presenta varias nuevas iniciativas específicamente para ayudar a las personas con discapacidad a obtener empleo. El Gobierno está invirtiendo 300 millones de coronas suecas en 2016 para que más personas consigan un empleo en Samhall AB (una empresa de propiedad del Estado dedicada a la creación de empleo para las personas con discapacidad) y para reducir el desempleo entre las personas con discapacidad. El coste de la reforma se estima en 400 millones de coronas suecas por año a partir de 2017.

44. Para seguir aumentando las oportunidades de empleo, el Gobierno también examinará los programas de subvenciones salariales para personas con discapacidad. La intención es aclarar el marco regulatorio y fortalecer los programas, con un claro énfasis en las oportunidades para todas las personas de desarrollar su capacidad de trabajo.

45. Además, el Gobierno opina que los organismos del Estado deben dar a más personas con discapacidad la oportunidad de participar en prácticas laborales. Por consiguiente, el Gobierno da instrucciones a los organismos estatales para que, durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, pongan prácticas laborales a disposición de las personas registradas en el Servicio Público de Empleo y acepten a demandantes de empleo con una capacidad de trabajo reducida debido a una deficiencia funcional en dichos puestos de prácticas. El objetivo es que estos solicitantes de empleo adquieran experiencia trabajando en un organismo estatal, lo que podría mejorar sus oportunidades de encontrar un empleo en el futuro.

46. El Gobierno también aplica amplias reformas para combatir el desempleo de larga duración y el juvenil, así como para reforzar la integración de los inmigrantes, etc. Aunque no se trate de medidas específicas dirigidas a las personas con discapacidad, suelen ser utilizadas por estas como un complemento, en función de las necesidades.

47. El Gobierno no tiene ningún sistema de cuotas para las personas con discapacidad.

Desempleo juvenil

48. Una de las prioridades del Gobierno es reducir el desempleo juvenil. La tasa de desempleo entre los jóvenes (de 15 a 24 años) en Suecia ha disminuido en 2015. La tasa de desempleo entre los jóvenes era del 22,3% en 2015, lo que representa una disminución de 2,6 puntos porcentuales en comparación con 2014 (Oficina de Estadística de Suecia, Encuesta sobre la Fuerza de Trabajo). Casi la mitad de los jóvenes desempleados son estudiantes a tiempo completo que buscan un empleo, especialmente trabajo adicional durante los fines de semana y los festivos. Para la mayoría de los jóvenes, el desempleo es

una situación relativamente breve, lo que indica que muchos jóvenes combinan el trabajo con breves períodos de desempleo.

49. Sin embargo, hay grupos de jóvenes desempleados que están alejados del mercado de trabajo y tienen dificultades para hallar una ruta que les conduzca a un empleo. Los que corren el mayor riesgo de sufrir desempleo de larga duración y otras dificultades relacionadas con el mercado de trabajo son los jóvenes que no han finalizado la enseñanza secundaria superior, las personas nacidas fuera de Europa y los jóvenes con discapacidad.

50. La garantía de empleo para los jóvenes es un programa marco puesto en marcha en diciembre de 2007 para los jóvenes de 16 a 24 años de edad que estaban desempleados y registrados en el Servicio Público de Empleo durante al menos tres meses en un período de cuatro meses. El número de participantes en la garantía de empleo para los jóvenes ha disminuido en 2014 y 2015. Esto se debe en parte a que los jóvenes se benefician de la mayor demanda de mano de obra y a cuestiones demográficas.

51. En 2015, el programa tenía un promedio de 27.000 participantes por mes, en comparación con los 33.000 participantes de promedio por mes en 2014. Se trata de un descenso del 18%. En 2013, el programa tenía un promedio de 38.000 participantes por mes.

Cuestión 13

52. Las medidas adoptadas para proporcionar oportunidades de empleo a las personas pertenecientes a minorías étnicas en Suecia son fundamentalmente de tipo general y no específico. Una de las tareas más importantes del Gobierno es reducir el desempleo y aumentar el empleo. El programa de empleo del Gobierno consta de tres partes: la inversión en el futuro: la vivienda, la adaptación al cambio climático y la infraestructura; una política activa de innovación y empresa para que se creen más empresas y en apoyo de las que crecen; e inversiones en aptitudes y adecuación. El programa incluirá una perspectiva clara de la igualdad de género. La inversión en empleo anunciada en el proyecto de ley de política fiscal del segundo trimestre y el proyecto de ley de presupuesto para 2016 asciende a 14 millones de coronas suecas para 2016.

53. Dentro de la Estrategia Sueca para la Integración de los Romaníes, el Servicio Público de Empleo recibió instrucciones de participar en un proyecto piloto para la inclusión de los romaníes en el período de 2012 a 2015. El organismo ha contratado a mediadores que hablan el idioma romaní y conocen su cultura en cinco municipios piloto y ha llevado a cabo actividades de desarrollo profesional para sus empleados. Desde 2012, los mediadores han ayudado a varios cientos de personas a inscribirse en la oficina de empleo, para empezar en un trabajo o adquirir experiencia laboral.

Artículo 7

Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

Cuestión 14

54. El Gobierno ha subrayado en varias ocasiones que debe abolirse el trabajo forzoso y todas las formas de explotación laboral. Suecia, como muchos otros Estados miembros de la OIT, ha ratificado el Convenio de la OIT núm. 29 relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio y ahora la cuestión de la ratificación del Protocolo de la Convención es objeto de consultas interservicios en la Secretaría General del Gobierno.

55. La Dirección del Ambiente de Trabajo de Suecia supervisa las condiciones de trabajo legalmente exigidas, tales como las normas respecto de las horas de trabajo y las normas sanitarias y de seguridad. El reglamento se aplica a todos los trabajadores

empleados, independientemente de su nacionalidad o su condición jurídica. A la Dirección se le ha asignado financiación adicional para el período de 2015 a 2018 a fin de fortalecer la supervisión y las inspecciones de las empresas y empleadores que vulneran las normas sobre el ambiente de trabajo para obtener ventajas competitivas.

56. En este contexto también cabe mencionar que, de conformidad con la Directiva de la Unión Europea sobre las sanciones contra los empleadores, el empleo ilegal de extranjeros residentes en Suecia sin los permisos necesarios está penado por la Ley de Extranjería (SFS 2005:716), independientemente de que el empleo sea intencional o por negligencia¹. Mediante una nueva ley (SFS 2013:644), se introdujo el derecho basado en la ley a reclamar a su empleador cualquier remuneración pendiente para los extranjeros que residan en Suecia sin los permisos prescritos (los inmigrantes empleados de manera ilegal).

57. En septiembre de 2014 se asignó a una comisión de investigación que examinara de qué manera las fuerzas del orden investigan y se ocupan de las cuestiones de la trata de seres humanos y estudiara medidas para reforzar la calidad y la eficacia de dichas investigaciones y aumentar los enjuiciamientos en los casos de trata de personas. En diciembre de 2015, también se asignó a la comisión de investigación el deber adicional de examinar la forma en que la legislación penal protege a las personas vulnerables contra la explotación, por ejemplo, el trabajo forzoso, la mendicidad o con otros fines de lucro. El objetivo es asegurar una protección penal firme y efectiva. Los resultados se presentarán el 9 de junio de 2016.

58. El 30 de octubre de 2015, la Dirección de Policía de Suecia tomó la decisión de reforzar su capacidad de lucha contra la trata de personas. La decisión estableció, entre otras medidas, que los equipos especializados debían ser capaces de luchar contra todas las formas de trata de personas y la delincuencia conexa en las principales regiones a cargo de la policía urbana en Suecia.

59. La Junta Administrativa del Condado de Estocolmo ha recibido el encargo de promover, en el nivel nacional, la coordinación y la cooperación entre los agentes que trabajan para combatir todas las formas de trata y prostitución en Suecia. La Junta, a su vez, ha nombrado a un Coordinador Nacional. Como parte de esta labor, la Junta ha elaborado programas de rehabilitación para víctimas de la trata realizada con fines sexuales y de prostitución. La Junta también dirige un proyecto de regreso en condiciones de seguridad con el fin de elaborar medidas para el retorno seguro de las víctimas de la trata a sus países de origen, a fin de que dicho regreso sea seguro, eficaz y esté organizado adecuadamente, de manera que se evite el riesgo de volver a caer en las redes de la trata.

60. La labor de la Junta de Condado fue evaluada en 2014, y fue considerada muy exitosa. Está previsto el funcionamiento de la comisión hasta el final de 2016.

61. La Dirección de Policía tiene la misión de proteger a las personas del delito, tarea que no depende de que estas contribuyan a alguna investigación preliminar. Está llevando adelante una labor sistemática de protección de quienes sufren amenazas, y las medidas que se adoptan son acordes a la necesidad de protección y apoyo de cada caso.

62. También hay un sistema eficaz que permite a las víctimas de delitos exigir a los autores que las indemnicen por los daños y perjuicios sufridos. Por ejemplo, los fiscales deben ayudar a las partes damnificadas entablando la acción penal que corresponda. Si el autor de un delito no está en condiciones de pagar la indemnización y no hay una póliza de seguros que cubra los daños, la víctima puede tener derecho a recibir compensación con fondos del Estado. Este derecho también puede existir incluso si el autor no ha sido

¹ Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular.

identificado. El pago constituye, principalmente, una compensación por los perjuicios y las lesiones personales sufridas. Las víctimas de trata con fines sexuales o de prostitución gozan del derecho a recibir compensación por los perjuicios en las mismas condiciones que las demás.

Cuestión 15

63. El actual Gobierno entró en funciones en otoño de 2014. Por lo tanto, no podemos comentar la primera pregunta.

64. En cuanto a la segunda cuestión, se han adoptado numerosas medidas desde que el Gobierno asumió el cargo. La Dirección del Ambiente de Trabajo de Suecia ha emitido disposiciones que directa o indirectamente se aplican a todas las esferas problemáticas mencionadas. En el proyecto de ley de presupuesto para 2016 se ha asignado un total de 100 millones de coronas anuales a la esfera del ambiente de trabajo. De esa cantidad, 60 millones de coronas se han empleado para aumentar el presupuesto de la Dirección del Ambiente de Trabajo de Suecia, lo que supone un aumento de más del 10%. Ello ha permitido a la Dirección ampliar su personal, principalmente con inspectores del ambiente de trabajo.

65. Asimismo, el 1 de febrero el Gobierno presentó su nueva estrategia de ambiente de trabajo al Parlamento sueco. La nueva estrategia incluye 12 tareas especiales para la Dirección del Ambiente de Trabajo de Suecia, de las que muchas se llevarán a cabo en colaboración con otras autoridades gubernamentales con un mandato relacionado con las esferas problemáticas.

Artículo 8 Derechos sindicales

Cuestión 16

66. El derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a uno está protegido por la Constitución de Suecia y, por consiguiente, es aplicable a los trabajadores de las empresas extranjeras que operan en el país.

Artículo 9 Derecho a la seguridad social

Cuestión 17

67. Si una persona con discapacidad tiene necesidades fundamentales privadas de más de 20 horas por semana y pertenece a los grupos comprendidos en la legislación entonces puede solicitar asistencia personal con arreglo al Código Social. Si la necesidad es de menos de 20 horas por semana, puede solicitar asistencia personal u otros servicios al ayuntamiento en virtud de la Ley de Apoyo y Servicio a las Personas con Determinadas Deficiencias Funcionales (LSS) o la Ley de Servicios Sociales (SoL).

68. Un informe de la Inspección de la Seguridad Social de Suecia que abarca el período de 2001 a 2014, muestra que en 2008 se produjo un cambio en la tendencia de las prestaciones de asistencia. Ese año se registraron menos solicitantes nuevos y el número de solicitudes rechazadas aumentó en casi un 50%. Al mismo tiempo, se han aprobado prestaciones de asistencia para alrededor de 1.000 nuevos solicitantes cada año, aunque el número ha oscilado entre 1.300 y 1.000 personas.

69. El panorama general en el informe de la Inspección es que las personas con discapacidad más necesitadas de apoyo están recibiendo asistencia personal. Si se compara a las personas a las que se concede asistencia personal con aquellas a las que se les rechaza la concesión, se ve que las personas a las que se concedió la asistencia habían recibido amplias ayudas antes de hacer su solicitud en mayor grado que los individuos cuyas solicitudes fueron rechazadas.

70. Esto significa que la asistencia personal se concede al grupo de personas con discapacidad que prevé la legislación. Sin embargo, hay una cierta cantidad de personas con necesidades sustanciales que solicitan asistencia personal pero que no tienen derecho a recibirla en virtud del reglamento actual. Según una encuesta realizada por el Consejo Nacional de Salud y Bienestar, el panorama general es que la mayoría de las personas a las que se les rechaza la prestación de asistencia personal de conformidad con el Código Social acceden a otros servicios en virtud de la Ley de Apoyo y Servicio a las Personas con Determinadas Deficiencias Funcionales (LSS) o la Ley de Servicios Sociales.

71. El Gobierno actualmente está preparando una investigación que examinará la legislación relativa a la asistencia personal del Código Social, así como partes de la Ley de Apoyo y Servicio a las Personas con Determinadas Deficiencias Funcionales (LSS).

Artículo 10

Protección de la familia, la madre y el niño

Cuestión 18

72. La aplicación de los diversos planes de acción en relación con la violencia del hombre contra la mujer aprobados por el Gobierno desde 2007 (con un costo de cerca de 2.000 millones de coronas suecas (alrededor de 200 millones de euros)) ha dado lugar a un nivel sustancialmente más elevado de ambición en el trabajo para prevenir y combatir la violencia del hombre contra la mujer.

73. A pesar de estos acontecimientos, las evaluaciones muestran que el acceso a la ayuda y el apoyo de buena calidad debe estar distribuido de forma más uniforme en todo el país y mejor integrado en la labor ordinaria de los servicios sociales y los sistemas de atención de la salud. También es necesario aumentar el conocimiento general y la labor preventiva respecto de la violencia entre el personal médico y social y demás personal clave que en su labor diaria atiende a mujeres y niños expuestos a la violencia. Debe dedicarse especial atención a los grupos vulnerables de víctimas de la violencia, como las ancianas y las mujeres con discapacidad. Otros grupos en situación de riesgo que están expuestos a la violencia son las mujeres jóvenes y las adolescentes. Estudios posteriores muestran que las mujeres jóvenes y las adolescentes están expuestas a la violencia en mayor medida de lo previsto. Esta violencia a menudo permanece oculta; uno de los motivos es que las mujeres jóvenes y las niñas no están incluidas en las encuestas estándar.

74. En junio de 2014, el Coordinador Nacional sobre Violencia Doméstica presentó su informe final al Gobierno. Varias de las propuestas del Coordinador se examinarán en el contexto de la próxima estrategia nacional del Gobierno para combatir la violencia del hombre contra la mujer, mientras que otras tienen aspectos comunes con las medidas ya adoptadas por el Gobierno. Estas últimas se refieren a la intervención de la policía y los servicios sociales cuando las víctimas de delitos cometidos por personas de su entorno necesitan recoger sus pertenencias de la vivienda, y a la apertura de un centro nacional de información sobre el maltrato y la violencia contra los niños. El Gobierno también ha intensificado su apoyo a los centros de acogida de mujeres y niñas, y ha hecho posible que estas organizaciones puedan solicitar subvenciones durante un período de dos años, lo que responde a la propuesta del Coordinador de conceder apoyo a más largo plazo a los centros

de acogida de mujeres y muchachas. El Gobierno ha incrementado también los fondos para proyectos de igualdad de género que apoyan la labor de los hombres y los chicos en favor de la igualdad de género.

Cuestión 19

75. En marzo de 2015, la Junta Administrativa del Condado de Östergötland presentó dos documentos de orientación sobre el modo en que las autoridades y los servicios locales pueden hacer frente a la violencia y opresión relacionadas con el honor y a la mutilación genital femenina. En junio, el Gobierno encomendó a la Junta Administrativa del Condado la distribución de dichos documentos de orientación a todos los municipios de Suecia, en colaboración con las demás juntas administrativas de condado.

76. La Junta Administrativa del Condado de Östergötland tiene también el mandato del Gobierno de identificar medidas de prevención en forma de apoyo parental universal y específico con miras a luchar contra la violencia y la opresión relacionadas con el honor, el matrimonio infantil y el matrimonio forzado, y la mutilación genital femenina. El Gobierno pretende con ello determinar métodos que produzcan resultados que puedan extenderse al resto del país.

77. Además, todas las juntas administrativas de condado han recibido el encargo de promover las medidas para combatir la violencia y la opresión relacionadas con el honor, así como prestar apoyo. La Junta Administrativa del Condado de Östergötland es la encargada de coordinar la presentación de informes sobre la labor encomendada. El informe final se presentará el 15 de marzo de 2016.

Cuestión 20

78. Estadísticas preliminares muestran que en 2015 se denunciaron 35 delitos de matrimonio forzado y 11 de engaño respecto de un viaje con fin de realizar un matrimonio forzado. Las estadísticas definitivas sobre delitos denunciados, así como sobre los delitos procesados y resueltos, se publicarán en marzo de 2016.

79. En 2014, el Gobierno encargó a la Junta Administrativa del Condado de Östergötland la organización de un equipo de especialistas con la tarea de promover, por diversos medios, la labor de lucha contra el matrimonio forzado, el matrimonio infantil y la violencia y la opresión relacionadas con el honor. Como parte de este cometido, la Junta Administrativa de Condado creó un servicio de asistencia telefónica para los profesionales que tratan a las víctimas.

80. El Consejo Nacional de Salud y Bienestar Social (el Consejo) ha calculado recientemente el número de niñas y mujeres que han sufrido o corren el riesgo de sufrir mutilación genital. Los resultados muestran que casi 38.000 niñas y mujeres en Suecia pueden haber sufrido algún tipo de mutilación genital. Estas niñas y mujeres fueron sometidas a mutilación genital antes de llegar a Suecia. Como parte de este mandato, el Consejo ha elaborado material para la formación de los profesionales sanitarios que tratan en los centros de salud con niñas y mujeres que han sufrido o corren el riesgo de sufrir mutilación genital, así como material orientativo para los instructores públicos cuando reciben a las recién llegadas al país.

81. Desde el 1 de julio de 2014, se aplican nuevas disposiciones de derecho penal y civil que refuerzan la protección contra el matrimonio forzado y el matrimonio infantil. Se han introducido dos nuevos delitos en el Código Penal de Suecia. Además, se suprimió la posibilidad de conceder a los niños una dispensa para contraer matrimonio. Las disposiciones sobre el reconocimiento de los matrimonios extranjeros son más estrictas también.

Artículo 11

Derecho a un nivel de vida adecuado

Cuestión 21

82. La Ley de Servicios Sociales de Suecia dispone que el Servicio Público de la sociedad debe, sobre la base de la democracia y la solidaridad, promover: i) la seguridad económica y social, ii) la equidad de las condiciones de vida, y iii) la participación activa en la sociedad. En cuanto a las medidas relativas a los niños, se tendrá en cuenta su interés superior.

Aclaración de los requisitos del complemento de renta

83. El Gobierno ha propuesto una nueva disposición en la Ley de Servicios Sociales para aclarar los requisitos del complemento de renta. El objetivo general es mejorar las condiciones para que los desempleados puedan volverse autosuficientes.

Iniciativas para los jóvenes que no trabajan ni estudian

84. En 2016, el Gobierno nombró a un investigador especial para que desempeñase la labor de Coordinador Nacional de las iniciativas para los jóvenes que no trabajan ni estudian. El objetivo es aumentar su capacidad de establecerse en la sociedad.

Esfuerzos contra la falta de vivienda

85. El Consejo Nacional de Salud y Bienestar tiene la misión encargada por el Gobierno de preparar un estudio nacional sobre las personas sin hogar y la exclusión en el mercado de la vivienda en 2017.

Aumento de la pensión alimenticia

86. A partir de septiembre de 2015, la pensión alimenticia para niños cuyos padres no viven juntos se elevó. Las nuevas normas entrarán en vigor en abril de 2016.

El seguro de los padres se vuelve más equitativo

87. El número de días durante los que un progenitor no puede renunciar al derecho a la prestación parental en favor del otro progenitor ha aumentado en 2016. Este es un paso dentro de los esfuerzos del Gobierno por aumentar la equidad en lo relativo a los trabajos domésticos y asistenciales no remunerados y la igualdad de género en el mercado laboral.

Alza del nivel básico de la prestación parental

88. En 2015 el Gobierno elevó el nivel básico de las prestaciones parentales. Un nivel más alto beneficia en particular a los padres jóvenes, pero también a las familias con progenitores nacidos en el extranjero.

Mejoras para los pensionistas desfavorecidos

89. El complemento de vivienda para las personas de más de 65 años mejoró en 2015. En 2016 se redujeron los impuestos a todos los pensionistas con ingresos de hasta 20.000 coronas mensuales. Las medidas están planteadas para afectar principalmente a los ciudadanos de edad con recursos económicos limitados. Esto significa que el porcentaje de personas de edad con un nivel económico bajo ha disminuido ligeramente. Dado que las mujeres tienen pensiones más bajas que los hombres, es una iniciativa que también beneficia a las mujeres.

Una mayor equidad e igualdad en la salud y el acceso a la atención de la salud de alta calidad

90. El acceso a la atención de la salud de buena calidad tiene un efecto positivo para el individuo y para la participación activa en la sociedad. La acción del Gobierno se centra, entre otras cosas, en que debe ofrecerse atención de salud a todas las personas, respondiendo a sus necesidades y a sus preferencias. La atención debe estar centrada en el paciente, ser accesible, segura, basada en conocimientos, eficaz y equitativa y neutral en cuanto al género. En 2015 entró en vigor una nueva Ley del Paciente que tiene por objeto reforzar la posición del paciente y su capacidad de elección. Otros ejemplos de medidas adoptadas en 2015 son las iniciativas especiales en esferas como la igualdad de atención, la salud mental, un tratamiento contra el cáncer más accesible y la salud de la mujer. En 2015, el Gobierno nombró una comisión para la equidad en materia de salud.

Solicitantes de asilo

91. El número de refugiados y personas desplazadas en el mundo en la actualidad es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Varios conflictos graves están forzando a la gente a huir. El número de personas que solicitarán protección en la Unión Europea en los próximos años será elevado. Aunque el número de niños no acompañados ha aumentado y está aumentando en la Unión Europea, Suecia sigue siendo el país a donde se dirige el mayor número de niños no acompañados. El gran número de solicitantes de asilo supone también un creciente desafío para el sistema de acogida de Suecia. La Junta de Inmigración ha adoptado una serie de medidas para hacer frente a la situación, por ejemplo, mediante la capacitación y la contratación de nuevo personal.

92. El Estado tiene una responsabilidad financiera por la acogida de refugiados y compensa a los ayuntamientos los gastos relacionados con la acogida de nuevos refugiados, otras personas necesitadas de protección y sus familiares y los niños no acompañados. La Junta de Inmigración ofrecerá medidas de empleo para los solicitantes de asilo; el objetivo es que el tiempo de espera hasta que se produzca una decisión sea provechoso. Todos los esfuerzos encaminados a reducir los plazos de tramitación son una prioridad. El Gobierno considera importante que los solicitantes de asilo tengan una toma de contacto con el idioma sueco en una fase temprana del proceso. La Junta de Inmigración ha creado modalidades de empleo organizado a fin de ofrecer orientación en sueco, así como contactos con la comunidad local y la sociedad civil.

Cuestión 22

93. Suecia no tiene medidas dirigidas a grupos étnicos específicos, sino que tiene un procedimiento de recepción de inmigrantes recién llegados que es independiente de su origen. La prioridad principal del Gobierno en esta esfera es crear puestos de trabajo para los recién llegados.

94. La segregación residencial varía en función de la posición en el mercado de trabajo. Por lo tanto, las medidas para fomentar la entrada en el mercado de trabajo son tan importantes como aquellas para luchar contra la segregación. No obstante, esas medidas se presentan en otro lugar.

95. Los esfuerzos realizados para combatir la segregación residencial no están vinculados de manera específica con la dimensión étnica.

96. Hasta 2015, había una “labor de desarrollo urbano” en curso que abarcaba 15 barrios urbanos en 9 municipios. Esta ya no es una iniciativa separada. En lugar de ello, el Gobierno está haciendo hincapié en un desarrollo urbano sostenible coherente, que se toma como punto de partida para la tarea de hallar maneras de centrarse en la exclusión social y la segregación residencial.

97. En la primavera de 2014 se puso en marcha una plataforma para el desarrollo urbano sostenible, con el objetivo de coordinar y desarrollar las cuestiones relacionadas con el desarrollo urbano. En 2016, una de las esferas prioritarias para la plataforma será la exclusión social.

98. Se han llevado a cabo algunos proyectos de investigación en el marco de la iniciativa de la labor de desarrollo urbano. Recientemente se han presentado los resultados. Uno de ellos deja claro el gran potencial para contrarrestar la segregación y la exclusión social que hay en el proceso de ordenación territorial. El Gobierno seguirá recopilando conocimientos sobre estas cuestiones y elaborando iniciativas.

99. Además, el Gobierno ha presentado un gran conjunto de iniciativas (por un valor aproximado de 6.000 millones de coronas) sobre el mercado de la vivienda, por ejemplo, de apoyo a la construcción de viviendas asequibles y de alquiler, que, dado que no requieren el pago de una entrada, son más accesibles, y también constituyen una opción para aquellas familias que no pueden o no quieren comprar su propia casa.

100. Se incluyen en el conjunto de medidas dos iniciativas dirigidas a las zonas desfavorecidas. Estas iniciativas contribuyen a la creación de posibilidades de adoptar un enfoque integral en esas zonas y aumentar la calidad y el bienestar de las personas que allí viven:

- Apoyo para soluciones eficaces de energía y la renovación de viviendas multifamiliares en barrios con dificultades socioeconómicas. Ello contribuirá a que el nivel de vivienda de Suecia se mantenga alto y uniforme. Los residentes tendrán la posibilidad de influir en el proceso de renovación. La renovación también crea oportunidades de empleo.
- Apoyo a las medidas en las zonas al aire libre de los barrios con dificultades socioeconómicas. El objetivo es estimular las actividades al aire libre y un sentido de comunidad. Además, a largo plazo contribuirá a crear entornos atractivos, funcionales, equitativos y seguros.

101. Otras medidas que se han puesto en marcha recientemente o se están elaborando, dirigidas a los barrios con baja participación de los votantes:

- Apoyo a proyectos encaminados a construir o constituir un centro local de recursos. Los centros de recursos serán puntos de reunión para la participación local en los que se puede animar a los residentes a tomar parte en redes, grupos o asociaciones y en los que se ofrecerá apoyo y orientación sobre, por ejemplo, la manera de influir en la toma de decisiones.
- Apoyo para actividades culturales organizadas por los residentes.
- Un proyecto de formación artística conjunto con los residentes.

Cuestión 23

102. Un desalojo forzoso de una vivienda permanente solo puede ejecutarse si el arrendatario ya no tiene derecho a residir en el apartamento, es decir, si el contrato de alquiler se ha cancelado o ha expirado. La situación que se da cuando un propietario desea rescindir el contrato con un arrendatario está escrupulosamente regulada en la legislación sueca. Existen requisitos específicos que deben cumplirse, tanto en la forma como en el fondo. Naturalmente, estos varían según los hechos de cada caso concreto.

103. Las razones más comunes por las que los inquilinos pierden su derecho de residencia y por las que se cancelan los arrendamientos son que el inquilino no ha abonado el alquiler o que molesta a los que viven en la zona circundante. En muchos casos, especialmente en el de la cancelación porque el inquilino no cumple sus obligaciones, debe

darse una advertencia al inquilino antes de que se pueda rescindir de manera efectiva el contrato. El arrendatario no puede ser desalojado de la vivienda mientras no se resuelva el conflicto por el contrato. El propietario deberá ponerse en contacto con el comité de bienestar social en el municipio si un inquilino no paga el alquiler a tiempo y comunicar también el motivo. El arrendatario tiene derecho a un período de espera de tres semanas antes de ser obligado a abandonar la vivienda. Durante este período, el comité de bienestar social decidirá si el arrendatario tiene derecho a ayuda económica para pagar el alquiler.

104. Si el inquilino no tiene derecho a residir en el apartamento y no lo abandona voluntariamente, puede realizarse el desalojo forzoso a través de la Autoridad de Ejecución de Suecia. Antes de que tenga lugar el desalojo, el demandado deberá tener la oportunidad de expresar su parecer. Sin embargo, si se desconoce el domicilio del demandado y no se ha podido determinar el lugar donde reside, el desalojo se puede producir a pesar de que el demandado no haya tenido la oportunidad de expresar su parecer. El desalojo se ejecutará de modo que el interés del solicitante y la situación del demandado se tengan en cuenta de manera razonable. De ser posible, el desalojo tendrá lugar dentro de un plazo de cuatro semanas. El desalojo puede ejecutarse únicamente una semana después de que al demandado se le haya permitido expresar su parecer o, si el demandado reside en el extranjero, dos semanas después de que se le enviara la notificación. La Autoridad de Ejecución puede dictaminar una moratoria del desalojo por un período máximo de cuatro semanas si, a la vista de la situación del demandado, ello fuera necesario.

105. No hay estadísticas específicas sobre la incidencia de los desalojos forzosos que sufren los romaníes en Suecia. Sin embargo, un estudio realizado en el marco de la Estrategia Sueca para la Integración de los Romaníes sobre la situación actual de los romaníes que son ciudadanos suecos y que viven permanentemente en los cinco municipios piloto puso de manifiesto un conjunto de obstáculos en el mercado de la vivienda de Suecia a los que se enfrentan los romaníes. Las denuncias presentadas ante el Defensor de la Igualdad muestran que los romaníes suelen tener un acceso limitado a la vivienda. La mitad de todos los acuerdos y las sentencias judiciales sobre discriminación en materia de vivienda está relacionada con los romaníes. Aproximadamente una quinta parte de todas las denuncias de discriminación en el acceso a la vivienda involucra a ciudadanos romaníes (2009-2013). En algunos casos, se ha denegado a ciudadanos romaníes el acceso a propiedades de alquiler o la compra de un apartamento en régimen de inquilino-propietario, y en otros casos los romaníes han sido hostigados por el propietario de la vivienda. Como parte de su labor sobre los derechos y las oportunidades de los romaníes, en 2014 el Defensor de la Igualdad inició un diálogo con, entre otros, la Junta Nacional de Vivienda, Construcción y Planificación, a fin de elaborar proyectos conjuntos sobre la discriminación en la esfera de la vivienda.

106. Otro tipo de desalojo está relacionado con la evacuación de los asentamientos ilegales, que se realiza mediante la asistencia de ejecución. El propietario puede solicitar dicha asistencia a la Autoridad de Ejecución si una persona reside ilegalmente en la propiedad. El demandado recibirá una orden de desalojo tanto si accede a la reclamación como si la rechaza. Si el demandado rechaza la reclamación la Autoridad de Ejecución emitirá una resolución. El demandado puede recurrir la resolución ante el tribunal de distrito en un plazo de tres semanas. La Autoridad de Ejecución es la encargada de ejecutar la resolución. Con muy pocas excepciones, el demandado recibirá una notificación antes de la ejecución. El objetivo siempre es hacer que los demandados desalojen la propiedad por su propia voluntad. Si ello no fuera posible, la policía puede asistir a la Autoridad de Ejecución. El Ministro de Justicia ha nombrado a un comisionado para examinar la manera de mejorar las posibilidades a disposición de los propietarios de obtener la asistencia de ejecución respecto de los asentamientos ilegales.

107. En los casos de asistencia de ejecución relativos a los ciudadanos de la Unión Europea, la Autoridad de Ejecución normalmente trabaja con intérpretes y asistentes sociales del municipio presentes en el lugar para informar a los demandados de la ejecución. El ayuntamiento es el responsable en última instancia de asegurar que las personas que residen dentro de su demarcación reciban el apoyo y la asistencia que necesitan. Si la persona se encuentra solo temporalmente en el municipio, la responsabilidad del ayuntamiento se limita únicamente a la asistencia de emergencia. Esto significa, por ejemplo, que un ciudadano de la Unión Europea sin derecho de residencia en Suecia en un caso de evacuación de un campamento únicamente tiene derecho a la asistencia de emergencia. La asistencia de emergencia puede llevar asociada un alojamiento temporal, dinero para alimentos y un billete de regreso a su hogar. Cuando las medidas afecten a los niños, se prestará especial respeto al requisito de tener en cuenta el interés superior del niño.

108. A principios de 2015, el Gobierno nombró a un coordinador nacional para la labor relativa a los ciudadanos de la Unión Europea que no tienen derecho de residencia en Suecia. La razón principal de esta iniciativa fue que los ciudadanos de la Unión Europea (principalmente de Bulgaria y Rumania) habían comenzado a llegar a Suecia en busca de sustento en mayor número que antes y que a menudo practicaban la mendicidad. El coordinador presentó un informe en febrero de 2016. Según el informe, la mayoría de esos ciudadanos de la Unión Europea son romaníes. A menudo pernoctan en lugares públicos y propiedades privadas, lo que en algunos casos plantea la cuestión del desalojo.

Artículo 12

Derecho a la salud física y mental

Cuestión 24

109. Suecia ha eliminado todos los alojamientos institucionales para las personas con discapacidad y ha aumentado el apoyo y los servicios disponibles en las comunidades. Entre los ejemplos del apoyo y los servicios para que las personas puedan vivir de forma independiente en la sociedad se incluyen la asistencia de conformidad con la Ley de Servicios Sociales (SoL) y el apoyo y el servicio con arreglo a la Ley (1993:387) de Apoyo y Servicios a las Personas con Determinadas Deficiencias Funcionales (LSS).

110. La ley establece que las actividades en cuestión deben basarse en los derechos a la libre determinación y a la intimidad del individuo. En la medida de lo posible, debe darse a la persona afectada la oportunidad de influir y determinar las medidas de manera conjunta. Las medidas incluidas son las siguientes: asesoramiento y otras formas de apoyo personal, asistencia personal, servicio de acompañante, asistencia de una persona de contacto, servicio de asistencia en el hogar, estancia breve fuera del hogar, breve período de supervisión para escolares, hogares familiares u hogares con servicios especiales para los niños, modalidades de alojamiento con servicios especiales para adultos y actividades diarias.

111. De conformidad con la ley, los ayuntamientos son responsables de la mayor parte de la asistencia y los servicios. Una persona que no esté satisfecha con una decisión sobre una medida en virtud de la LSS puede recurrir ante un tribunal administrativo de apelación, en primer lugar, ante el Tribunal Administrativo del Condado.

112. En lo que respecta a la supervisión, la Inspección de Atención de la Salud y Asistencia Social (IVO) es el organismo gubernamental responsable de la supervisión de la atención de la salud y los servicios sociales. La Inspección supervisa las actividades en el marco de la Ley de Servicios Sociales y la LSS. Su tarea es velar por que esas actividades

se lleven a cabo de conformidad con el espíritu de la ley. Los hospitales psiquiátricos y los hogares LVM están, por ejemplo, sujetos a la supervisión de la Inspección.

113. La atención obligatoria de la salud mental y la atención de la salud mental por médicos designados en Suecia se rigen por la Ley de Atención Obligatoria de la Salud Mental (1991:1128) y la Ley de Atención de la Salud Mental por un Médico Designado (1991:1129).

114. La Junta Nacional de Atención Institucional (SiS) ofrece cuidados obligatorios individualizados para los jóvenes con problemas psicosociales y para los adultos con problemas de uso indebido de sustancias. Los jóvenes instalados en hogares especiales pueden ser confinados en salas de aislamiento especiales si emplean la violencia o amenazan el orden del hogar por estar bajo los efectos de las drogas. Solo cabe recurrir a medidas de aislamiento si guardan proporción con el objetivo perseguido. En lo posible, si resultan adecuadas, deben aplicarse medidas menos restrictivas. La decisión puede recurrirse ante un tribunal de justicia.

Cuestión 25

115. En 2008 y 2013 el Parlamento sueco aprobó dos nuevas leyes: la Ley (2008:344) de Atención de la Salud de los Solicitantes de Asilo y Otros y la Ley de la Salud y la Atención Médica para las Personas Residentes en Suecia sin el Permiso Necesario (2013:407).

116. A los solicitantes de asilo y las personas indocumentadas menores de 18 años se les prestará atención médica y de la salud, incluida la atención dental, en las mismas condiciones y en la misma medida que a los niños residentes. A los solicitantes de asilo y las personas indocumentadas mayores de 18 años se les prestará atención de la salud y dental urgente, atención de maternidad, asistencia para el aborto y asesoramiento sobre métodos anticonceptivos.

Artículos 13 y 14 Derecho a la educación

Cuestión 26

117. Las minorías nacionales (indígenas samis, finlandeses suecos y de Tornedal, romanés y judíos) tienen mayores oportunidades de recibir enseñanza en sus idiomas minoritarios nacionales en el marco de la enseñanza en lengua materna que otros grupos de Suecia, ya que están exentas de la mayor parte de las obligaciones relacionadas con la enseñanza en lengua materna en su idioma minoritario. Desde el 1 de julio de 2015, los niños de las minorías nacionales en la enseñanza obligatoria también están exentos del requisito de que deben tener conocimientos básicos en la lengua de la minoría. Tampoco es ya necesario, tanto en la educación obligatoria como en la secundaria superior, que sus padres tengan como lengua materna el idioma minoritario.

118. En noviembre de 2013, se encomendó a la Agencia Nacional de Educación de Suecia (NAE) la tarea de apoyar el desarrollo de materiales educativos en los idiomas de las minorías nacionales y sobre ellos. Esta tarea se prolongó con fondos adicionales en agosto de 2014. En 2014 también se encargó a la Agencia la presentación de propuestas de planes de estudio para la enseñanza de la lengua materna en los idiomas de las minorías nacionales en la enseñanza obligatoria. Un objetivo de este encargo ha sido revitalizar la enseñanza haciendo posible el estudio de los idiomas desde el nivel inicial o de principiante.

119. La Ley de Educación estipula que los niños que son solicitantes de asilo tienen derecho a la educación en los cursos de preescolar y la enseñanza preescolar, primaria y secundaria. También tienen derecho a la enseñanza secundaria superior si esta da comienzo

antes de que cumplan 18 años. A partir del 1 de julio de 2013 la Ley estipula también que los niños que se encuentren en Suecia sin permiso legal tienen derecho a la educación en los cursos de preescolar y la enseñanza primaria y secundaria. Al igual que en el caso de los solicitantes de asilo, este derecho también incluye la educación secundaria superior si se inicia antes de que el niño cumpla 18 años. No hay programas nacionales de educación específicos para los estudiantes inmigrantes y los ayuntamientos se encargan de su educación de la misma forma que son responsables de proporcionar educación a todos los residentes.

Cuestión 27

120. De conformidad con la Ley de Educación, todos los niños y jóvenes deben gozar de igualdad de acceso a la educación en el sistema escolar nacional. Esto incluye a los niños con discapacidad. La Ley de Educación establece que la enseñanza debe tomar en consideración las diversas necesidades de los niños y los alumnos. Los niños y los alumnos deben recibir apoyo y aliento para que puedan desarrollarse en la mayor medida posible, sobre la base de sus propias capacidades específicas. Un objetivo en este esfuerzo es compensar las diferencias en la capacidad de los niños y alumnos para sacar partido de la educación. Al aprobarse la nueva Ley de Educación en 2011, también se introdujo el derecho a recurrir las decisiones relativas al apoyo especial.

121. Dado que el sistema educativo sueco está basado en el principio de inclusión, la mayoría de los niños y jóvenes con discapacidad reciben su educación en el marco de las formas ordinarias de enseñanza. Solo el 1,3% de todos los alumnos en la escuela obligatoria y la secundaria superior reciben su educación al margen de las formas ordinarias de enseñanza, es decir, en la educación para alumnos con deficiencia intelectual o en escuelas especiales para niños con ciertas discapacidades.

Artículo 15

Derechos culturales

Cuestión 28

122. Aparte de las medidas que se indican a continuación, la información presentada en el informe del Estado parte sigue siendo válida.

123. Además de las medidas en la esfera de la educación, el Gobierno ha adoptado otras para asegurar que se refuerce el idioma sami. Entre ellas hay elementos de la libre determinación en respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

124. El Instituto de Lengua y Folclore administra un programa de becas del Gobierno cuyo objetivo es facilitar el aprendizaje y el uso del idioma de su minoría, por ejemplo, el sami.

125. Se conceden subvenciones para los programas que mejoren la lectura y la escritura en los idiomas de las minorías, tales como las actividades educativas en el idioma que se está aprendiendo, los proyectos de idioma destinados a los niños y sus padres y las iniciativas de lectura. Además, se dispone de fondos para proyectos destinados a promover una mejor comprensión del multilingüismo, el idioma como vehículo de la cultura o la transmisión de la lengua entre generaciones. Se presta apoyo particular a las actividades centradas en los niños y los jóvenes.

126. A partir de 2016, el Gobierno aumentará permanentemente la subvención al Parlamento sami para la cultura sami en 1 millón de coronas suecas. El objetivo es promover una cultura sami dinámica y crear mejores condiciones para el arte y la vida cultural sami. El Parlamento sami, la autoridad administrativa de la cultura sami, tiene la

tarea de decidir cómo asignar la subvención del Estado a fin de mejorar el intercambio entre la cultura y el idioma.

Cuestión 29

127. El acceso a Internet se consigue principalmente a través de las fuerzas del mercado. Sin embargo, la Ley de Comunicaciones Electrónicas puede actuar como una red de seguridad jurídica. Esta esfera está armonizada con la Unión Europea. Sin embargo, la Ley no supone un derecho absoluto. La Ley dispone que, en caso necesario, las solicitudes razonables de servicios universales (que incluyen un acceso funcional a Internet) deben estar disponibles a precios asequibles. En la misma disposición se indica que dichos servicios deben garantizarse mediante la provisión por parte del Estado si fuera particularmente necesario debido al coste total de prestar el servicio o el acceso a la red.
